

27 de septiembre, Año del Libertador General San Martín, 1950

51ª REUNION — 45ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación,
y del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, presidente provisional
del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

Prosecretario: doctor ALBERTO A. GRAZIANO

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDÚA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
ENDEIZA, Victor W.
GIAVARINI, Alejandro Bautista
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
HERRERA, Ramón Esteban
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
MADARIAGA, Eduardo
MATHUS HOYOS, Alejandro
MENDIONDO, F. Daniel
RAMELLA, Pablo A.
ROLDAN, Ramón Ángel
SCATAMACCHIA, Mauricio Antonio
SOLER, Lorenzo
TANCO, Miguel A.
TEISAIRE, Alberto
VIVIANI, Rinaldo
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON LICENCIA:

LAZARO, Juan Fernando de
MOLINARI, Diego Luis

SUSPENDIDO:

SANCHEZ RECALDE, Luis N. A.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo.
- II.—Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica la promulgación de las leyes 13.930 y 13.943.
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio sobre migración y su protocolo adicional con España.
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el protocolo adicional al convenio comercial y financiero con Hungría.
- V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre arancel de abogados y procuradores.
- VI.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando copia del decreto 10.810/50, sobre apertura de un crédito para el cumplimiento de una sentencia judicial.
- VII.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.
- VIII.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.
- IX.—Despachos de comisiones.

2.—A moción del senador Ramella, se resuelve tratar como primer asunto en el día de mañana el proyecto de ley referente a elección popular de los gobernadores y régimen electoral municipal de los territorios nacionales.

3.—Asuntos entrados:

X.—Peticiónes particulares.

XI.—Comunicación particular.

- 4.—A moción del senador Scatamacchia, se autoriza a la Presidencia del Honorable Senado a comunicar las sanciones, a medida que se produzcan, a la Honorable Cámara de Diputados.
- 5.—Proyecto de ley de la Comisión Bicameral Segunda Revisora de Cuentas aprobando las cuentas de inversión correspondientes a los años 1945 y 1946.
- 6.—Proyecto de ley del senador Herrera y otros senadores, por el que se acuerda una subvención al Círculo Militar en su calidad de depositario de la Biblioteca Nacional Militar.
- 7.—A moción del senador Scatamacchia, se fijan los asuntos a considerar en la sesión de la fecha.
- 8.—Consideración de los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales en los proyectos de ley, en revisión, acordando autorización para aceptar honores y cargos conferidos por gobiernos extranjeros. Se aprueban y quedan convertidos en ley.
- 9.—Consideración del despacho de las comisiones Municipal y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, modificando el artículo 2º de la ley 13.487, de régimen rentístico de la Municipalidad de Buenos Aires. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 10.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley del senador de Lázaro sobre reconocimiento de servicios prestados en las escuelas de comercio Nos. 3 y 7. Se aprueba.
- 11.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión, sobre modificación del artículo 4º de la ley 13.075, de reorganización de la Dirección General de Asistencia y Previsión para Ferrovios. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 12.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando el convenio sobre migración y su protocolo adicional con España. Se aprueba.
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el protocolo adicional al convenio comercial y financiero con Hungría. Se aprueba.
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje del Poder Ejecutivo sometiendo a consideración del Con-

greso el decreto 10.810/50, sobre apertura de un crédito para el cumplimiento de una sentencia judicial. Se aprueba.

- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, aprobando excesos de inversión del Banco de Crédito Industrial Argentino. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 16.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar al gobierno de Córdoba una partida de madera de rezago para la construcción de viviendas. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 17.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, autorizando a la Dirección General de Fabricaciones Militares para que ceda al obispado de Jujuy una fracción de terreno. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 18.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión, sobre prosecución de obras viales en la provincia de Corrientes. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 19.—Consideración del despacho de la Comisión Bicameral Segunda Revisora de Cuentas en el proyecto de ley aprobando cuentas de inversión correspondientes a los años 1945 y 1946. Se aprueba.
- 20.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos en el proyecto de ley, en revisión, sobre represión de actos de espionaje, sabotaje y traición. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 21.—Consideración del despacho de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de ley del senador Amelotti sobre creación del Instituto de Sericultura de la Nación. Se aprueba con modificaciones.

22.—Asuntos entrados:

XII.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

- 23.—A moción del senador Mathus Hoyos, se resuelve invitar a los señores ministros de Agricultura y Ganadería, y de Economía, para la sesión de mañana.

24.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

III.—Inserciones.

chísimos años, y donde se encontraron representados todos los partidos políticos que desfilaron por el escenario de la Nación.

Dijimos en aquella oportunidad, recordando a Alberdi, que eran de la esencia del sistema representativo de gobierno la publicidad de los actos administrativos y el contralor del ejercicio financiero en función, ayer anual y en torno de la ley fundamental del Estado que es la ley de presupuesto, y hoy bianual por las reformas introducidas por la Constitución justicialista.

Aquello que expresamos en nombre del partido, y como una seria advertencia a la opinión pública, hoy tiene la corroboración, el hecho cierto del silencioso trabajo de los legisladores peronistas, lo que honra a la democracia argentina; y hay que agregar que fué una de las preocupaciones obsesionantes del coronel Perón en los días anteriores a su campaña presidencial como bien le consta a vuestra excelencia, ayer ministro del Interior, hoy senador de la Nación, presidente provisional del Senado, jefe de nuestro partido.

Por ello, he aplaudido, porque se ha cumplido diligentemente con expresas disposiciones de la carta fundamental de mi patria.

Sr. Presidente (Teisaire). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Teisaire). — Queda aprobado el despacho.

20

REPRESION DE ACTOS DE ESPIONAJE, SABOTAJE Y TRAICION

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos ha considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre represión de los actos de espionaje, sabotaje y traición a la Nación; y, por las razones que dará su miembro informante, os aconseja le prestéis su aprobación. De acuerdo con el artículo 100 del reglamento del Honorable Senado este despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, septiembre 27 del Año del Libertador General San Martín, 1950.

Armando G. Antille. — Pablo A. Ramella. — Eduardo Madariaga.
—Ernesto F. Bavio.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(Septiembre 2 de 1950)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las acciones u omisiones previstas en la presente ley que constituyan ayuda y socorro a los enemigos de la Nación serán calificadas de traición cuando hubieran sido cometidas por argentinos o por cualquier persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública.

Espionaje

Art. 2º — Será reprimido con prisión de uno a diez años el que procurare, buscare, revelare, remitiere o aprovecharse noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.

Art. 3º — Será reprimido con prisión de dos a quince años el que cometiere los delitos previstos en el artículo 2º sirviéndose de su empleo, función, estado o misión.

La pena será de ocho a veinticinco años de prisión, o prisión perpetua, si el agente actuare al servicio o en beneficio de una potencia extranjera.

Art. 4º — Será reprimido con prisión de uno a ocho años el que con cualquier ardid o engaño o mediante efracción o escalamiento se introdujere en una obra cualquiera de defensa, puesto, servicio, depósito, almacén, construcción de defensa nacional, o en todo otro establecimiento militar; o en un barco, aeronave, vehículo, servicio o establecimiento industrial organizado o empleado por la autoridad competente en el interés de la defensa nacional.

Art. 5º — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que careciendo de permiso de autoridad competente tomare fotografías, ejecutare dibujos, operaciones topográficas, geológicas o reproducciones, por cualquier medio o método, de zonas, obras o materiales situados dentro de un radio prohibido por la autoridad en razón de la defensa nacional.

En igual pena incurrirá el que copiare, imitare, vendiere, distribuyere, publicare o retuviere dichas reproducciones.

Art. 6º — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años todo aquel que sin autorización para ello entregue, remita, comunique, publique o difunda datos económicos, políticos, militares, financieros o industriales que sin ser secretos o reservados no estén destinados a su publicación o divulgación, y de los cuales haya tenido conocimiento o se le hubieren confiado en razón de su empleo, función, estado o misión.

Sabotaje

Art. 7º — Será reprimido con prisión de uno a veinticinco años el que por cualquier medio desorganizare, destruyere, deteriorare o inutilizare, en todo o en parte, temporal o definitivamente, documentos, objetos materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el desarrollo militar, econó-

mico, financiero, social, científico o industrial de la Nación.

Cuando los actos fueran realizados al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, se podrá imponer al culpable prisión perpetua.

Art. 8º.—Será reprimido con prisión de uno a ocho años el que por cualquier medio provoque pública alarma o deprima el espíritu público causando un daño a la Nación.

Disposiciones generales

Art. 9º.—Será reprimido con prisión de un mes a cinco años el que, habiendo entrado en contacto con en espía o saboteador, y conociendo la calidad de ese agente, no lo comunique a las autoridades civiles o militares.

Art. 10.—Será reprimido con prisión de un mes a cinco años, o con multa de \$ 100 a \$ 10.000, el que por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos permitiese o facilitase la comisión de cualquiera de los actos previstos por esta ley.

Art. 11.—En los casos de los artículos 2º, 3º, 4º y 7º, cuando el delito fuere cometido en tiempo de guerra, con grave daño para la Nación o sus aliados, se podrá aplicar reclusión perpetua o pena de muerte.

Art. 12.—Incurrirá en las mismas penas establecidas para los autores de los delitos previstos en esta ley:

- a) El que instigare a cometerlos, aunque la instigación no hubiere dado resultado;
- b) El cómplice o encubridor. El encubrimiento no será penado cuando lo cometan el cónyuge, los consanguíneos y afines en línea ascendente o descendente, los hermanos o los afines colaterales en segundo grado;
- c) El que esté vinculado a un organismo, asociación, institución o persona que desarrolle actividades de sabotaje o espionaje, teniendo conocimiento de tales actividades;
- d) El que apoye, financie o contribuya a financiar la ejecución de los delitos. Si se tratare de una persona jurídica, será pasible del retiro de la personería, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los miembros culpables;
- e) El autor de tentativa, cuando haya sido cometida con fin de espionaje o sabotaje.

Art. 13.—La condena por los delitos previstos en esta ley llevará como accesoria la inhabilitación especial o absoluta hasta por doble tiempo de la condena, según la gravedad del caso. La inhabilitación absoluta contendrá, además, la prohibición de presidir o dirigir toda clase de empresas, sociedad o asociación.

Cuando el delito se hubiere cometido al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, corresponderá siempre la accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua.

Si el condenado fuera extranjero o argentino naturalizado, cumplida la pena se procederá a su expulsión de la República, previo retiro, en su caso, de la ciudadanía.

Art. 14.—Quedará exento de sanción penal el que habiendo incurrido en los actos calificados como delito por esta ley, los denuncie ante las autoridades civiles o militares, antes de haberlos consumado.

Podrá ser declarado exento de sanción penal todo aquel que luego de haber consumado el delito lo denuncie a las autoridades civiles o militares, y procure el arresto de los coautores o cómplices.

Art. 15.—La prescripción de la acción y de la pena en los casos que corresponda pena de muerte se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Justicia Militar.

Art. 16.—Cuando los delitos previstos en la presente ley fueran ejecutados fuera del territorio del país, sus autores quedan igualmente sujetos a sus disposiciones y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Se aplicará asimismo, esta ley a todo aquel que en territorio argentino haya cometido actos de espionaje o sabotaje al servicio o en beneficio de un Estado extranjero contra otro Estado extranjero.

Art. 17.—La aplicación de la presente ley estará a cargo de la Justicia Federal. Los tribunales militares la aplicarán también dentro de su jurisdicción.

Art. 18.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTECEDENTES

Mensaje

Buenos Aires, 25 de agosto de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a estudio de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el cual el Estado argentino busca asegurar la defensa de los sagrados intereses nacionales sujetos en la época presente principalmente, a posibles ataques ocultos de agentes y agrupaciones que respondiendo a intereses opuestos a los de la Nación pretendieran debilitar su potencial integral.

La calificación y medidas que se concretan sobre espionaje, sabotaje y traición a la Nación, responden a los más modernos conceptos jurídicopenales que rigen la materia y tienen su más efectivo apoyo en los preceptos de nuestra Constitución justicialista, particularmente en su artículo 15 cuando establece que: «El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad.»

Con la ley que el Poder Ejecutivo somete a la consideración de vuestra honorabilidad, la República llena un vacío existente en el cuerpo de leyes de la Nación y se coloca, en cuanto a la seguridad nacional, a la altura de los más adelantados países del mundo.

La situación internacional del momento, impone, por otra parte, que el presente proyecto de ley sea estudiado, discutido y convertido antes de la clausura del año legislativo a fin de que el país cuente con tan valioso instrumento para su defensa lo antes posible.

Por otra parte, la importancia, medios, procedimientos, etcétera, que caracterizan en el presente la acción del espionaje y sabotaje en general, la desaprensión con que tales actos se realizan así como la peligrosidad de los mismos para la Nación, imponen al Poder Ejecutivo y al Congreso la adopción urgente de medidas eficaces para asegurar, con la máxima determinación y energía, nuestra soberanía, así como los inapreciables bienes materiales y espirituales de los que somos celosos depositarios y guardianes.

El proyecto adopta, para ello, un criterio puramente objetivo y abandona, además, el elemento tradicio-

nal de clandestinidad, respecto de la responsabilidad que cabe a los agentes en esta clase de actividades. Vale decir, que se incurrirá automáticamente en las sanciones que se prevén por el solo hecho de la exteriorización de la conducta, si ésta queda comprendida en cualquiera de los actos que enumera el proyecto en su artículo 2º y concordantes. El elemento intencional, que por íntimo y psicológico es tan difícil de investigar, juega únicamente como elemento agravante a los efectos de la graduación de la sanción por parte del juzgador. En una palabra, se adopta el mismo principio del delito objetivo en algunas figuras del Código Penal, como la simple tenencia de explosivos o materiales para la acuñación de moneda que, por sí solo y sin necesidad de investigar la intención del guardador o poseedor, configura el delito y acarrea la correlativa penalidad.

El efecto intimidatorio que de propósito busca el proyecto, para frenar y alejar a esos indeseables de nuestro país, se ha materializado, no sólo en el rigor de las sanciones sino, también, en el apartamiento de ciertos principios tradicionales de la legislación referente a prescripción, territorialidad, tentativa, complicidad, encubrimiento, etcétera, que no deben jugar en la represión de hechos que hacen fundamentalmente a la seguridad nacional y a la personalidad de nuestro país en el concierto de las naciones.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Angel G. Borlenghi.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Las acciones u omisiones previstas en la presente ley que constituyan ayuda y socorro a los enemigos de la Nación serán calificadas de traición cuando hubieran sido cometidas por argentinos o por cualquier persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública.

Espionaje

Art. 2º — Será reprimido con prisión de 1 a 10 años el que procurare, buscare, revelare, remitiere o aprovecharse noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.

Art. 3º — Será reprimido con prisión de 2 a 15 años el que cometiere los delitos previstos en el artículo 2º sirviéndose de su empleo, función, estado o misión.

La pena será de 8 a 25 años de prisión, o prisión perpetua, si el agente actuare al servicio o en beneficio de una potencia extranjera.

Art. 4º — Será reprimido con prisión de 1 a 15 años el que con cualquier ardor o engaño o mediante efracción o escalamiento se introdujere en una obra cualquiera de defensa, puesto, servicio, depósito, almacén, construcción de defensa nacional, o en todo otro establecimiento militar; o en un barco, aeronave, vehículo, servicio o establecimiento industrial organizado o empleado por la autoridad competente en el interés de la defensa nacional.

Art. 5º—Será reprimido con prisión de 6 meses a 6 años el que sin mira de espionaje, pero careciendo

de permiso de autoridad competente, tomare fotografías, ejecutare dibujos, operaciones topográficas, geológicas o reproducciones por cualquier medio o método, de zonas, obras o materiales situados dentro de un radio prohibido por la autoridad en razón de la defensa nacional.

En igual pena incurrirá el que copiare, imitare, vendiere, distribuyere, publicare o retuviere dichas reproducciones.

Art. 6º—Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años todo aquel que sin autorización para ello entregue, remita, comunique, publique o difunda datos económicos, políticos, militares, financieros o industriales que sin ser secretos o reservados, no estén destinados a su publicación o divulgación.

Sabotaje

Art. 7º — Será reprimido con prisión de 1 a 25 años el que por cualquier medio desorganizare, destruyere, deteriorare o inutilizare, en todo o en parte, temporal o definitivamente, documentos, objetos, materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el desarrollo militar, económico, financiero, social, científico o industrial de la Nación.

Cuando los actos fueran realizados al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, se podrá imponer al culpable prisión perpetua.

Art. 8º — Será reprimido con prisión de 1 a 8 años el que por cualquier medio provoque pública alarma o deprima el espíritu público causando un daño a la Nación.

Disposiciones generales

Art. 9º — Será reprimido con prisión de 1 mes a 5 años el que, habiendo entrado en contacto con un espía o saboteador, y conociendo la calidad de ese agente, no lo comunique a las autoridades civiles o militares.

Art. 10. -- Será reprimido con prisión de 1 mes a 5 años, o con multa de 100 a 10.000 pesos el que por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos permitiese o facilitase la comisión de cualquiera de los actos previstos por esta ley.

Art. 11. -- En los casos de los artículos 2º, 3º, 4º y 7º, cuando el delito fuere cometido en tiempo de guerra con grave daño para la Nación o sus aliados, se podrá aplicar la pena de muerte.

Art. 12. -- Incurrirá en las mismas penas establecidas para los autores de los delitos previstos en esta ley:

- a) El que instigare a cometerlos aunque la instigación no hubiere dado resultado;
- b) El que preste a un espía o saboteador ayuda o asistencia, o encubra sus actos. El encubrimiento no será penado cuando lo cometan el cónyuge, los consanguíneos y afines en línea ascendente o descendente, los hermanos o los afines colaterales en segundo grado;
- c) El que esté vinculado a un organismo, asociación, institución o persona que desarrolle actividades de sabotaje o espionaje, teniendo conocimiento de tales actividades;
- d) El que apoye, financie o contribuya a financiar la ejecución de los delitos. Si se tratare de una persona jurídica, será pasible del re-

tiro de la personería, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los miembros culpables;

- e) El autor de la tentativa, cuando haya sido cometida con fin de espionaje o sabotaje.

Art. 13. — La condena por los delitos previstos en esta ley llevará como accesoria la inhabilitación especial o absoluta hasta por doble tiempo de la condena, según la gravedad del caso. La inhabilitación absoluta contendrá, además, la prohibición de presidir o dirigir toda clase de empresas, sociedad o asociación.

Cuando el delito se hubiere cometido al servicio o en beneficio de una potencia extranjera, corresponderá siempre la accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua.

Si el condenado fuera extranjero o argentino naturalizado, cumplida la pena se procederá a su expulsión de la República, previo retiro, en su caso, de la ciudadanía.

Art. 14. — Quedará exento de sanción penal el que habiendo incurrido en los actos calificados como delito por esta ley, los denuncie ante las autoridades civiles o militares antes de haberlos consumado.

Podrá ser declarado exento de sanción penal todo aquel que luego de haber consumado el delito lo denuncie a las autoridades civiles o militares y procure el arresto de los coautores o cómplices.

Art. 15. — La acción y la pena en los casos que corresponda pena de muerte serán imprescriptibles.

Art. 16. — Cuando los delitos previstos en la presente ley fueran ejecutados fuera del territorio del país, sus autores quedan igualmente sujetos a sus disposiciones y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Se aplicará asimismo esta ley a todo aquel que, en territorio argentino, haya cometido actos de espionaje o sabotaje al servicio o en beneficio de un Estado extranjero contra otro Estado extranjero.

Art. 17. — La aplicación de la presente ley estará a cargo de la justicia federal. Los tribunales militares la aplicarán también dentro de su jurisdicción.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Angel G. Borlenghi.

Sr. Presidente (Teisaire). — Está en consideración.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Como presidente de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos me corresponde presentar un informe acerca del proyecto sobre represión de actos de espionaje, sabotaje y traición, que está a consideración del Honorable Senado.

Claro y conciso, el mensaje que ha hecho llegar al Parlamento el presidente de la Nación, acompañando el proyecto, contiene el pensamiento y las razones intrínsecas que han animado al Poder Ejecutivo a llevar a nuestra República a colocarse, en lo que respecta a la seguridad del Estado, en consonancia con la legislación de los países más adelantados del mundo. En él se dice con verdad y sencillez cuál es el propósito de la ley y cuál es el espíritu de la legislación que se proyecta. El debate en la Cámara de Diputados sobre la materia de-

muestra la versación jurídica completa de los que defendieron el proyecto de la mayoría y también —por qué no decirlo— de los representantes de la minoría al discutirse el proyecto de ley.

Estamos, señor presidente, en una época en que cuanto podamos prevenir en bien de la seguridad de la Nación es conveniente practicarlo. Desde las sombras, agazapados en los rincones más escondidos, se agitan en nuestro mundo circundante los traidores al servicio de alguna potencia extranjera, o los individuos capaces de vender a la patria, inspirados por intereses arraigados en lo más bajo de sus pasiones.

En nuestro país, señor presidente, la traición interna no puede inquietarnos. Son temibles las que de lejos, desde las tinieblas, preparan la traición y el espionaje para las potencias de afuera. La traición interna no puede inquietarnos, digo. Poco nos preocupa, porque sólo puede existir como una excepción y no ha de existir para nosotros durante mucho tiempo un argentino que pueda ser calificado de traidor. Lo que hay que prever y prevenir es la traición de afuera. Decir que el panorama político mundial no es tenebroso y desalentador sería tener una venda en los ojos. Por ello, toda precaución que se tome no será en vano, sin duda alguna.

En el proyecto que discutimos no hay nada complejo, nada inextricable, nada confuso, nada que pueda llevar una falsa alarma o una duda al pueblo. Es, en sí mismo, sencillamente, una prevención, un instrumento legal del que se podrá echar mano cuando las circunstancias lo exijan.

El espionaje ha tenido en todas las épocas de la historia sus redes ocultas. Los príncipes se valieron de él desde remotos tiempos. Desde la traición velada y en las propias filas de los ejércitos; desde la violación de secretos que comprometieron la seguridad de un reino, hasta la intrigas cortesanas de los palaciegos embozados, la historia habla con demasiada elocuencia sobre sus positivos resultados. Espionajes realizados a sangre fría, con la naturalidad del artista, señor de la escena, perdieron más de una vez a un reino o hicieron caer a una república, y también, en más de una ocasión, la victoria de un espía alcanzó más éxito que la victoria de un ejército.

No menos terribles han sido los efectos del sabotaje. Largas crónicas de catástrofes, explosiones, estragos y hechos o noticias sembradoras de pánico han llenado las páginas rojas de la prensa de muchos países en diversas épocas, preparando de esa manera el caótico derriumbé de una nación o el derrocamiento de un régimen constituido.

Dice Rafael Rómulo Palandri, en un trabajo publicado en la revista de la Facultad de Derecho, titulado «Tipificación contemporánea de

los delitos de espionaje», lo siguiente: «La Biblia, en el Génesis, capítulo 42, nos relata la expedición de los hijos de Jacob, de la Tierra de Canaan a Egipto, donde el propio hermano de los emisarios, José, a la sazón favorito de la corte egipcia, los tilda de espías ante el faraón. En las leyes de Manú está prevista una forma de sabotaje militar... «el que rompiere un seto, una muralla...» Tácito, en «Germania», capítulo XII, nos habla de las costumbres sociales de los germanos y del concepto que les merecían los espías y los traidores. La Biblia contiene la conocida anécdota de Sansón y Dalila. Las seductoras caricias de una mujer —dice— fueron el medio empleado por los filisteos para eliminar al invencible guerrero judío.»

Espionaje y sabotaje. ¿Cómo un Estado, cómo una Nación puede permanecer insensible ante la configuración de cualquiera de estos delitos, que casi siempre aparecen unidos y al mismo tiempo?

En la obra antes citada, agrega el doctor Palandri: «El Estado es la máxima corporación territorial y contrae con respecto a sus elementos constitutivos, población, territorio y poder, desde su origen, sagrados deberes de protección, seguridad y amparo. Como persona jurídica de existencia necesaria, es un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y además el único depositario de la norma y de la coerción, factores que, según Kelsen, se confundirían en su propia esencia; norma y coerción son sustentados y se ejercen por medio del brazo armado del Estado: la tutela penal.» Y agrega luego: «La tutela penal se extiende proleiforme tanto al campo público como al privado. Vigilante y el ojo avisor, esgrime bajo su égida el conjunto de preceptos y sanciones que crean a su conjuro la recta obligación de abstenernos de cometer actos nocivos y peligrosos contra las personas, sus derechos y sus bienes o contra la autoridad gubernamental, el orden o contra el Estado mismo.»

La legislación comparada da las normas del carácter de estos principios penales. En algunos países americanos existen leyes que reprimen severamente estos delitos contra la seguridad y la defensa del Estado. En Chile, por ejemplo, rige la ley 7.401, que castiga las actividades que vayan contra la seguridad interior del Estado, cuyo artículo 1º me permitiré leer: «Comete delito contra la seguridad exterior de la República, todo aquel que favorezca a países en guerra con un Estado americano o sus aliados, o perjudique a éstos mediante los siguientes hechos: a) Envíe o transmita al exterior noticias de cualquiera utilidad para los Estados en guerra con los países del continente americano o sus aliados; b) Difunda o publique noticias de carácter militar y del movimiento de barcos de nacionalidad chilena, siempre que Chile esté

en guerra o haya roto relaciones diplomáticas; c) Proporcione a las fuerzas armadas de un país en guerra con un Estado americano o sus aliados, cualquiera clase de auxilios personales, dinero, vituallas o combustibles; d) Practique reconocimientos, levante planos, saque croquis o tome fotografías o películas cinematográficas de plazas o recintos militares, puertos o radas militares, arsenales, almacenes, plantas hidroeléctricas, aeródromos u otros lugares que interesen a la defensa nacional, sin la correspondiente autorización; e) Introduzca al territorio de la República, municiones u otros elementos bélicos, sin la debida autorización; f) Publique o reproduzca por cualquier medio, noticias falsas, documentos supuestos adulterados que perjudiquen a Chile o a algún país americano o sus aliados en guerra con otro país americano; g) Proponga, intente o realice cualquiera acción encaminada a perjudicar las instalaciones de cualquiera naturaleza, relacionadas con algún servicio público o empresas o industrias destinadas a la defensa, el aprovisionamiento o a los medios de locomoción o comunicación, etcétera.»

Me detengo en la lectura fragmentaria de este precepto del código de Chile, porque es análogo al que vamos a votar esta noche. No sobran las palabras; no sobran las referencias; son indispensables, por tratarse de estos delitos tan especiales como el espionaje, el sabotaje y la traición. Si continuáramos leyendo las leyes de otros países, veríamos que igualmente se encuentran detalles completos cuando se hace referencia a esta clase de delitos.

La ley sancionada en Estados Unidos el 15 de junio de 1917, determina con prolijidad absoluta todo lo que se refiere al conocimiento de los actos que se deben realizar con el propósito de obtener informaciones con respecto a la defensa nacional, cuando las mismas serán utilizadas en contra de Estados Unidos para beneficio de alguna otra nación, ya sea que se entre, salga, se vuele, o en cualquiera otra forma se obtengan datos relacionados con algún barco, aeronave, trabajos de defensa, astilleros, bases navales, bases de submarinos, depósitos de carbón, fuertes, baterías, etcétera. Como se ve, nada se deja sin prever; ningún acto sin sancionar; todos son elementos que pueden constituir el delito de espionaje o de sabotaje.

El artículo 2º del proyecto en discusión dice: «Será reprimido con prisión de uno a diez años, el que procurare, buscare, revelare, remitiere o aprovecharse noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deben permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.»

Este principio, señor presidente, no ha podido ser objetado en el debate de la Cámara de Diputados, por razones morales e intelectuales. En realidad, estos hechos y actos constituyen

la base del espionaje y del sabotaje futuro. Seguramente no se realiza sabotaje si no está con-juncionado con el espionaje.

Entre nosotros, el doctor Jantus ha dictado un fallo respecto a un conscripto de la Compañía de Ametralladoras del Regimiento 2 de Infantería, en el que se considera esta cuestión en forma amplia y detallada. En la sentencia en la que el juez federal de esa época resolvió el caso que le fué denunciado, se dice: «De las constancias del expediente se desprende que el conscripto declara que, en repetidas oportunidades se entrevistó con uno de los redactores de «Bandera Roja» —periódico comunista— que se hacía llamar Dighero, el que le entregó ejemplares del citado diario, para que los hiciera circular en el cuartel, solicitándole datos e informaciones para publicar artículos como los agregados a fojas tal y tal». Otro conscripto del Regimiento 1 de Infantería hace manifestaciones concordantes, y termina el juez condenando al instigador, después de considerar probada su responsabilidad, transcribiendo las expresiones de la Corte Suprema de la Nación, la que, en un fallo anterior, establecía que «sería inadmisibles que una Nación que vive en el orden y la libertad, asegurada por instituciones en vigor, acoja en su seno a seres extraños, a sabiendas de que quienes así lo solicitan profesan ideas disolventes o demole-doras del propio régimen político bajo cuya protección intentan colocarse; importaría ello tanto como conspirar contra la vida del Estado y de la Nación».

Y esto ocurría en esa época, aun cuando la ley aplicaba el Código Penal que, justo es señalarlo, no contenía la amplitud de las disposiciones que se pueden leer en el proyecto que está en discusión. El Código Penal se refería a casos especiales, que no implicaban el sabotaje, que no implicaban la traición, ni tampoco el delito que estamos sancionando ahora. Por eso, el juez se fundó en que había un delito de desacato y de instigación a cometer otro delito, con cuya calificación, y con la prueba rendida, decretó años de prisión contra el acusado.

Con respecto a otros artículos de este proyecto, cabe recordar que, en general, debe sancionarse todo intento de subvertir el régimen o sistema interno de gobierno, o de atacar a la dignidad de la Nación.

En oportunidad de considerarse un proyecto de represión del comunismo en el año 1936, se debatieron principios sociales a él vinculados, en nuestro Congreso. En esa ocasión, se leyó un fragmento del manifiesto de Marx y Engels, fechado en 1848, y tomado como principio doctrinario. En ese manifiesto se dice: «Los comunistas no tienen por qué ocultar sus opiniones y sus propósitos: Abiertamente declaran que su objetivo no puede ser alcanzado por otro medio

que por el derrumbamiento violento del régimen social presente.»

En otro comunicado, el consejo ejecutivo de la Internacional Comunista se proponía «obligar a los jóvenes comunistas a ingresar en todas las organizaciones de masas de la juventud trabajadora, creadas por los partidos demócratas burgueses, pidiéndoles que ingresen en esos partidos, así como a las asociaciones religiosas, sindicales, culturales, deportivas, etcétera», y «a desplegar, dentro de esas organizaciones, una lucha sistemática por la influencia sobre las extensas masas de la juventud, movilizándolas a la lucha».

Se leyó también una de las directivas del entonces XII Congreso del Socorro Rojo internacional, que rezaba: «Es necesario prestar atención seria al desarrollo de los métodos gráficos de agitación, aprovechando dibujos, caricaturas, placas, cintas cinematográficas, fotografías de los encarcelados y carteles, especialmente en nuestro trabajo entre las capas más atrasadas de los trabajadores; excursiones en masa de la ciudad a las regiones agrícolas vecinas, edición de volantes y llamamientos. Todos esos métodos y otros más deben practicarse en el trabajo de las masas, especialmente entre los campesinos.»

Esto da la razón, señor presidente, de todo lo que se dispone en la ley que está en discusión.

No podemos dejar de aplicar los artículos 5º y 8º proyectados, puesto que depende de la sanción que en ellos se crea, la justa condena para los que delincan en esa forma.

En las mismas penas que hemos mencionado, incurre el que copiare, imitare, vendiere, distribuyere, publicare o retuviere las reproducciones a que se refiere el artículo citado.

Será reprimido, dice el artículo 8º, con prisión de uno a ocho años al que por cualquier medio provoque pública alarma o deprima el espíritu público, causando un daño a la Nación.

Esta disposición ha sido objetada severamente por algunos órganos periodísticos, y también debatida con calor en la Cámara de Diputados. La minoría opositora tuvo un representante eficaz de su punto de vista, el diputado Vítolo. El decía que esto era establecer un medio de alarma, un medio, casi diría él, inútil, porque no se indicaba una sanción; se buscaba unificar en una ley las figuras delictivas del Código Penal en este sentido, con el fin de aumentar las penas correspondientes.

Sin embargo, el señor presidente de la Nación al enviar el proyecto, en el mensaje con que lo acompaña, da las razones por las cuales se establecen el aspecto y el carácter de ese proyecto. Dice el mensaje: «El proyecto adopta, para ello —para sancionar los delitos—, un criterio puramente objetivo y abandona, además, el elemento tradicional de la clandestinidad, respecto de la responsabilidad que cabe a los agentes en esta clase de actividades», agregando más tarde

que «se adopta el mismo principio del delito objetivo en algunas figuras del Código Penal como la simple tenencia de explosivos o materiales para la acuñación de moneda que, por sí solo, y sin necesidad de investigar la intención del guardador o poseedor, configura el delito y acarrea la correlativa penalidad.»

Este aspecto, diríamos de innovación, en cuanto a la forma de considerar los delitos, fué atacado en la Cámara joven, y también en algunos órganos periodísticos, pero se olvidan los que hablan, los que discuten esta disposición, el propósito sano que estimula y que inspira al proyecto. El efecto intimidatorio que de propósito busca el proyecto, dice el Poder Ejecutivo, para frenar y alejar a los indeseables en nuestro país, se ha materializado no sólo en el rigor de las sanciones, sino también en el apartamiento de ciertos principios tradicionales de la legislación referentes a prescripción, a territorialidad, a tentativa, complicidad, encubrimiento, etcétera. Con esto quiere decir con toda franqueza el presidente de la Nación que no hay ocultamiento en el propósito de la ley; que no se busca intimidar porque sí, que se busca guardarse para la defensa de los ataques de dentro y fuera, cuando hay espionaje desarrollado y que culmina con el sabotaje cuando hay propósito de dañar. Pero esto no significa que estas disposiciones penales van a carecer de elemento substancial de todo delito, de la prueba del dolo en la comisión del delito. Aunque exista luego el hecho material que compruebe por sí mismo este delito, el juez, que es el llamado a resolver si hay tal infracción, va a determinar si hubo intención delictuosa en el agente y si por tanto merece la condena. Todos los que son acusados en nuestro país tienen la defensa, que es una garantía de nuestra Constitución. El defensor de un reo de esta especie sabrá demostrar que no tuvo dolo, que no tuvo intención, que no tuvo, aunque aparezca por el hecho ocurrido, el propósito de atentar contra la seguridad de la Nación.

Esto es lo substancial en todas las causas, y lo que debe calificarse así por la materialización, por la faz objetiva de eso mismo, pero que necesita luego la comprobación de la mala intención.

Con esto contesto las palabras que se han pronunciado contra esta ley en general y contra algunos artículos especiales a que he hecho referencia.

Hablábamos de que otros países también han determinado con gran minuciosidad cuáles son las partes, los hechos y los actos que constituyen este delito. Las reuniones públicas han servido más de una vez en nuestro país y en otros para disfrazar bajo la apariencia de un aceptable motivo —un homenaje, por ejemplo— los más severos alegatos de doctrinas izquierdistas, de sedición, de conspiración, etcétera. En el cantón de Vaud, en Suiza, verbigracia, el Consejo de

Estado emitió un fallo declarando prohibidos en todo su territorio los discursos marxistas del ciudadano de Neuchatel, Julio H. Droz. Inmediatamente, éste se amparó en el «recurso de derecho público», así llamado allí, pero el consejo decidió rechazarlo, por cuanto consideraba que Droz «no había dictado cursos». es decir, que el tópico había sido utilizado con otros fines que los que entrañaban el disertar sobre los principios científicos de Carlos Marx, como lo haría un profesor de economía política desde su cátedra. Y en los considerandos de la exposición hecha por el Consejo de Estado se dijo al respecto: «Si se coloca uno sobre el terreno de la libertad de reunión, limitada por el orden establecido por el Estado, la invitación pública a cometer actos ilícitos y punibles hace una ofensa a ese orden público, y una reunión cuyo objeto implica una invitación de esta índole no puede pretender la protección constitucional, aun cuando tal provocación no constituya actualmente un delito.»

Recuerdo en este instante las disposiciones de nuestra Constitución Nacional Justicialista, y mencionadas ya en el mensaje por el Poder Ejecutivo: «El Estado no reconoce la libertad para atentar contra la libertad»; contra la libertad, que constituye la garantía esencial de nuestra Constitución. En cuanto a la acción legislativa contra el sabotaje, que hizo su aparición en los Estados Unidos en el año 1917, y que alcanzó su mayor grado en 1919, debo decir que en aquel tiempo nada menos que 16 Estados, y a la vez Alaska y Hawaii, promulgaron leyes en ese sentido. Los Estados fueron: Arizona, California, Kentucky, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Dakota, Washington y otros muchos. La mayor parte de las leyes iban dirigidas en esos Estados contra el «sindicalismo criminal», en el que se comprendía la defensa contra el sabotaje. Arizona, por ejemplo, como injuria maliciosa y voluntaria a la propiedad. La definición de Nebraska comprendía la propiedad ferroviaria, los puentes y caminos, edificios y equipos manufactureros y todo producto agrícola manufacturado. El sabotaje era definido por la ley de Dakota del Norte, como incendio de granos o productos alimenticios, el envenenamiento de cualquier trabajo o cualquier producto alimenticio animal, con la intención de impedir o estorbar la alimentación pública. En el Estado de Montana se definía el sabotaje como daño, injuria o destrucción de la propiedad, maliciosa o criminal o intencionada e ilegalmente; y Washington hacía de él un crimen de injuria, de daño a la propiedad en orden a obstruir una empresa industrial, comprendiendo en la calificación al que intervenía en el acto y al que lo defendía como táctica.

El movimiento contra el «sindicalismo criminal», definición americana del sabotaje, aparentemente producto de la psicología de guerra, se detuvo en la evolución legislativa, en el año

1912. Kentucky ha legislado entonces y después, en 1922, aunque tratando de hacer la ley menos severa.

El espionaje es, como se sabe, una voz que viene del vocablo italiano *spia*, y el espía ha sido definido así: la persona que con disimulo, con secreto y sigilo, observa y escucha lo que pasa para comunicarlo al que se lo ha mandado. Se aplica generalmente al individuo o al agente especial que está dedicado a observar la organización, situación, armamentos, fuerza, movimientos, estado moral y sucesos de un ejército o tropas, y medios de defensa y lucha de un estado para dar cuenta de toda noticia que se adquieran y datos que posean al gobierno, al estado mayor o al jefe de quien recibieron el encargo de hacer el espionaje.

Conviene recordar, además, sobre este punto, lo que ha escrito el general Thiebault en su *Manual de los estados mayores*: «Nada hay tan importante en un ejército como la organización del espionaje. Un aviso dado a tiempo suele dar la victoria y salvar de una derrota.

La guerra no es dudosa en sus resultados sino porque puede uno engañarse sobre los movimientos del enemigo; el que los conozca sin tardanza y sin incertidumbre, aun cuando sólo posea escasas fuerzas y talento ordinario, no debe temer ningún fracaso. Para conseguir el objeto —dice—, que siempre es engañar al enemigo en lo que quiere saber, y enterarse de lo que tiene interés en ocultar, sólo pueden emplearse espías, los cuales son de varias especies, pues unos que prestan este servicio por efecto de pasiones personales, otros por celo, éstos por interés, aquéllos por odio y varios, en fin, por temor...

Debemos recordar a los señores senadores al tratar este punto, que no llamamos servicio de espionaje el que hizo el general San Martín al cruzar la cordillera de los Andes para libertar a Chile. Debemos, sí, recordarlo, porque se valió de esta forma de penetrar en un país, sin que los españoles que eran enemigos nuestros en ese tiempo, se dieran cuenta. Por un lado mandó un emisario para que fuera tomado prisionero por los adversarios y les hiciera creer que el camino que tomaría nuestro ejército era otro que el que efectivamente siguió. Este era su propósito, por el ingenio que tenía en todo sentido y condición nuestro glorioso general San Martín. No se valió del espionaje, pero sí se valió de un subterfugio para engañar al enemigo, que es lo que se hace cuando se utiliza el espionaje y cuando se trata de preparar una invasión, tal como lo hicieron los gobiernos totalitarios de Mussolini y de Hitler cuando quisieron invadir a Francia y a otras naciones de Europa. Prepararon la invasión enviando espías que tuvieron por meta hacer decaer la moral de la población, a la que hicieron creer que era imposible la defensa; les quitaron el

vigor para la lucha por el abatimiento de los principios de moral, y entonces pudieron invadir fácilmente.

Esto es lo que queremos evitar con la ley de espionaje, con estas leyes que deben ser severas para que tengan fuerza de intimidación, que es el propósito expresado con valentía por el señor presidente de la Nación.

En España hay un reglamento, una legislación que viene a establecer el servicio de campaña del ejército en este aspecto. Los artículos de dicho reglamento, establecen que «en general se considera como culpables de espionaje a todos los que intenten por cualquier medio, proporcionar al enemigo informes capaces de comprometer las operaciones. El oficio nada tiene de infamante —se dice allí— fuera de los casos en que el espía sirve al enemigo contra la causa de su propio país, traición que se castiga con la muerte, o de los que prestan sus servicios por dinero. Además de los espías por oficio, las leyes de guerra consideran como tales: toda persona que sin precisa autorización reconozca, tome apuntes y noticias, levante planos de plazas, almacenes, edificios, terrenos importantes de operaciones; el que por soborno o cualquier medio ilegal adquiera documentos reservados e importantes sobre cualquier asunto, y al enemigo que disfrazado se introduzca en las filas de las tropas o puntos fuertes; toda persona que voluntariamente, o por retribución, conduzca para el enemigo pliegos, partes o noticias. En fin, dice al terminar el articulado, toda persona que proteja, oculte o ponga en salvo un espía o un agente del enemigo».

Como se ve, señor presidente —y es mi intento con esta lectura comprobar que no es cosa nueva la que vamos a legislar—, no es una novedad la adopción de las medidas indispensables en defensa de nuestra Nación. Es una imitación, diremos en parte, de muchas de las legislaciones que he leído y que podría seguir leyendo largamente.

En cuanto a la traición, otra de las disposiciones importantes que contiene nuestro proyecto, es sabido que no puede dar motivo a discusión ni objeción alguna. La traición ha sido ya definida por nuestra Constitución Nacional, tanto en la del año 1853 como en la que se sancionó en 1949. Dice el artículo 29 de la vieja Constitución: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.» Esta disposición debe recordarse porque también allí se sujeta a los que formulen, consientan o firmen esa resolución «a la responsabilidad y pena de los infames

traidores a la Patria», y es análoga en cuanto a la calificación, a la definición dada por el artículo 103 de la vieja Constitución, y al 33 de la Constitución actual. «La traición contra la Nación —se dice en ellos— consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de ese delito... etcétera.» El código penal en su artículo 214 también se refiere a la traición en esta forma: «... todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro» comete el delito de traición y es sometido a la pena de diez a veinticinco años de reclusión o prisión, o prisión perpetua, y en uno y otro caso inhabilitación absoluta perpetua siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición del Código Penal.

Como se ve, no constituye el primer artículo de nuestro proyecto una innovación; es simplemente una referencia a principios constitucionales y penales ya establecidos en nuestras leyes y, por tanto, que deben ser, desde ya, respetados. Ahora bien, ¿por qué nuestra ley es la repetición de estos preceptos que existían en el Código Penal y en la Constitución? ¿Por qué la establecemos, sin haber fijado penas más severas que las que fija el Código Penal sino en casos excepcionales? Porque es indispensable dictar una ley armónica, una ley que forme una agrupación de todos los preceptos referentes al sabotaje, a la traición y al espionaje; porque es necesario que tenga un espíritu armónico y homogéneo esta ley; que se sepa cuál es la intención, el sentido y el espíritu de estas disposiciones; que se vea claramente que se trata de legislar para asegurar la defensa de la Nación.

Se ha dicho que por ser objetiva esta ley —es el argumento más serio con que fué criticada en la Cámara de Diputados— por ser objetiva, y por apartarse un poco en cuanto a la fijación de un propósito que tiene efecto intimidatorio, no podía ser sancionada. Me parece que ese fué un error grave, un error serio; era de tal manera evidente la razón que asistía al Poder Ejecutivo al enviar este mensaje, y a los señores diputados que la aprobaron, que el propio miembro informante de la minoría, que se opuso a su sanción, declaró casi al finalizar su informe: «yo quiero declarar esta noche que este proyecto pudo ser sancionado como una modificación al Código Penal, que este proyecto no debe ser sancionado con el sentido que tiene, que puede significar dolor para el pueblo argentino», y agregó que «declaraba que ningún argentino de cualquier partido que sea negará jamás su apoyo decidido a la lucha en que esté

en juego la dignidad nacional o la libertad del pueblo.» Quiere decir que los mismos opositores, en el debate, no se negaron a reconocer que era susceptible de aprobación esta ley. Solamente la objetaron porque no está comprendida en el Código Penal, en el conjunto de artículos que lo forman, pero no es una novedad que en nuestro Congreso se dicten leyes especiales sobre cuestiones de derecho penal, como hay ejemplos que podríamos recordar. De manera que la única observación es que no estuviera comprendida en el Código Penal sancionado y existente en vigor en la fecha. Con esto se ve cómo caen todos los argumentos que se opusieron en el momento de su sanción en aquella Cámara.

En cuanto a otras observaciones que se han hecho, la falta de un dolo especial en el delito, por ejemplo, declaro que no puede existir, según los principios jurídicos que aceptamos, un delito sin que no lleve el dolo como esencia y consubstanciación de ese delito. No puede haber una configuración del delito si al hecho con que éste se realiza no lo acompaña la intención que lleve al agente a cometerlo, y eso no lo puede negar nadie. Los jueces llamados a sancionar la pena con la aplicación de los artículos que se han de votar, han de tener presente, primero, que si bien es cierto que en algunos casos existen elementos materiales que constituyen lo fundamental en el delito, como, por ejemplo, la tenencia de explosivos, han de tener presente, repito, la intención que se abrigó al tenerlos, la intención que se tuvo al cometer cualquiera de los actos que se sancionan por esta ley.

Por otra parte, ¿qué observación se puede hacer para oponerse a este proyecto? Ninguna que pueda ser aceptable en este momento. Por mi parte renuncio a la lectura de otras leyes existentes en legislaciones extranjeras, puesto que lo que he dicho es más que suficiente para demostrar la absoluta seguridad que tenemos los señores senadores para sancionar sin reformas, como lo ha despachado la comisión que presido, el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.

Estoy muy de acuerdo con que en la Cámara de Diputados se haya debatido extensamente este asunto, precisamente porque había cierta prevención, para aceptarlo, en la opinión pública, porque había ciertos reparos en alguna asociación de abogados, en el conjunto de abogados que forman una federación, en las que se decía que se iba contra la libertad y contra la seguridad individual, que se le daban poderes absolutos al Poder Ejecutivo. Pero esto es totalmente inexacto, porque si no hay delito, si no hay hecho que constituya un delito, si no hay intención de delito, no puede aplicarse esta ley. Los jueces dirán cuándo y con qué justicia se ha de aplicar.

Nada más señor presidente. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Madariaga. — Pido la palabra.

Señor presidente: deseo contemplar este proyecto de ley desde dos puntos de vista que interesan a las masas populares de todo el país: el punto de vista del movimiento nacional, que representamos y el de la doctrina peronista, que interpretamos.

Lo que se pudo decir contra la sanción de esta retardada sanción legislativa —retardada en el tiempo, desde luego— no pudo pasar de una simple alharaca opositora que los letrados tienen la facilidad de expresar con vehemencia pero sin razón ni patriotismo.

Este proyecto de ley no es otra cosa que la necesaria y oportuna sanción de figuras delictivas y de penas que completan las que se definen y enumeran en el viejo Código Penal argentino, entre otros, en los títulos de los «Delitos contra la seguridad pública», «Delitos contra el orden público.» «Delitos contra la seguridad de la Nación», y «Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.»

Muy bien define el Poder Ejecutivo de la Nación en su mensaje al Congreso, el concepto con que ha madurado y redactado esta iniciativa cuando dice: «La calificación y medidas que se concretan sobre espionaje, sabotaje y traición a la Nación, responden a los más modernos conceptos jurídicopenales que rigen la materia y tienen su más efectivo apoyo en los preceptos de nuestra Constitución justicialista, particularmente en su artículo 15, cuando establece que «el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad.»

Si estudiamos las disposiciones proyectadas comparándolas con las normas vigentes del Código Penal, veremos con clara evidencia que el proyecto tiende a llenar un vacío existente en la legislación penal argentina para colocar a la Nación en el lugar que debe tener, de acuerdo con su seguridad absoluta frente al momento mundial y considerando los resguardos que ya poseen, en esta materia, los Estados más adelantados del concierto internacional, sin excepción.

Desconocer la expansión mundial y los medios y procedimientos que en estos tiempos se conocen en lo tocante al espionaje, al sabotaje, importaría estar fuera de los sucesos y peligros que acechan a nuestro país tanto como a todos los países de nuestra común y cristiana civilización. La peligrosidad de aquellos medios y la falta de reparo, escrúpulo o delicadeza moral con que proceden millares de personas que se dedican a tan deplorable labor internacional, como es el «trabajo» de los espías y saboteadores, obligan a estudiar también la mejor forma legal de ponerle freno y a estatuir y aplicar con todo rigor las normas de la Nación Argen-

tina, como cualquiera otra potencia, necesita para su seguridad y que tiene el derecho y el poder constitucional para dictarlas mediante el ejercicio pleno de la función legislativa del Estado federal, que es lo que está haciendo el Congreso de la Nación.

El vasto y poderoso movimiento nacional que preside los destinos gloriosos de la República Argentina, no es solamente una acción recuperadora de los valores materiales y espirituales de la raza, sino también una afirmación rotunda de pueblo libre y soberano entre los más libres y soberanos de la tierra. El movimiento nacional peronista tiene profunda fe argentina y tiene el coraje para defenderla y sostenerla en todos los terrenos, dentro del territorio que por toda la eternidad será siempre argentino, cueste lo que cueste y tenga que caer quien tuviera que caer. Los ciudadanos de este movimiento imponente, desde el líder hasta los últimos soldados, sabemos de modo claro y definitivo que ninguna vida vale nada mientras la salud de la Nación esté en peligro. Los varones que pensamos de acuerdo con el líder y sostenemos su doctrina sobre la argentinidad sabemos muy bien lo que quiere decir Perón cuando afirma lo siguiente: «La creciente complejidad de la economía industrial, la estéril dispersión política o ideológica, el juego de ambiciones desmesuradas o de intenciones hostiles a la soberanía y a la afirmación nacionales —intenciones hostiles a la soberanía y afirmación nacionales—, son todos factores que no pueden quedar librados a su propia gravitación.» (*Doctrina Peronista*, página 27.)

El concepto que se refiere a «las intenciones hostiles a la soberanía y a la afirmación nacionales» —como dice el general Perón— amplía el viejo concepto de la traición, porque en estos tiempos de espionaje y de sabotaje, sin valentía ni delicadeza en la guerra, ni caballeridad, desde luego, en el terreno de semejantes delitos, no es posible desconocer que todo espía o saboteador, según nuestro juicio, es un verdadero traidor a la Nación, como quiera que fuese el punto de vista elegido para mirarlo y para juzgarlo.

Si un peronista fuera pillado en espionaje o en sabotaje, nadie dudaría de que es un delincuente traidor a la patria, repugnante como el peor de los malhechores conocidos. Al decir un peronista, digo con propiedad un argentino.

Nuestra patria y nuestro pueblo vienen de lejos y se proyectan al infinito en la historia del mundo.

El movimiento nacional que conduce el general Perón tiene el honor insigne de la responsabilidad concreta del destino de la Nación en marcha. Por eso pudo decir también el líder, definiendo uno de los fines del Estado: «El Estado, o sea la nación organizada jurídicamente, debe responder a los fines de la ley de conti-

nuidad histórica. El Estado debe amoldarse a los grandes progresos, tanto de la ciencia cuanto de la moral, porque ya no se vive el Estado omnipotencia, sino el Estado justicia, el Estado cultura, el verdadero Estado derecho.» (Página 30 de *La doctrina peronista*.)

Nosotros, los argentinos, señor presidente, creemos que vivimos un verdadero Estado de derecho, porque verdad es que no vivimos bajo el régimen de la violencia ni de la esclavitud, que configuran la arbitrariedad y el absolutismo bajo el Estado gendarme o Estado policial, o el Estado totalitario o el Estado dictadura o el Estado esclavitud, formas absolutamente foráneas y que la raza argentina desprecia y combate porque lucha por limpios ideales de justicia social, de sufragio universal, de vida cristiana y constitucional, bajo la bandera inmaculada de la patria.

Nosotros somos hombres libres pero celosos del orden público y de la ley de continuidad histórica del pueblo argentino. Por esa razón pudo afirmar el general Perón: «El Estado moderno no resiste la acción demoledora de los hechos económicos, sociales y políticos sin la reorganización de su propia defensa, comprendiendo que es una doctrina en acción.» (Página 30 de *La doctrina peronista*.)

Nuestro moderno Estado de derecho argentino realiza una política de seguridad social y de seguridad nacional, porque resguarda el interés del bien común en el seno de las masas populares y laboriosas y cuida con inmutable energía la libertad y la soberanía, bajo el doble imperio de sus derechos escritos y de sus armas gloriosas, como la Nación y la Constitución se lo imponen histórica y jurídicamente entre todos los pueblos del mundo contemporáneo.

Hace muchas décadas que esta gran nación dejó de ser una republiqueta, una mera republiqueta, porque supo defender con indomable valentía su soberanía, su libertad y su independencia, cumpliendo el destino sanmartiniano.

Hay en *La doctrina peronista* un anhelo patriótico, un verdadero voto proclamado con unción, y que dice así: «Quiera el Todopoderoso mantener la patria como hasta ahora, altruista y pacífica, pero decorosa y altiva; desinteresada y fraternal, pero libre, independiente y soberana; respetuosa del derecho y de la libertad ajenos, pero también respetada en su derecho y en su libertad, en los siglos de los siglos, por todas las naciones de la Tierra.»

El proyecto de ley del presidente de la Nación, que considera el Honorable Senado, como expresa el mensaje, tiene por finalidad imposterizable y urgente «la represión de hechos que hacen fundamentalmente a la seguridad nacional y a la personalidad de nuestro país en el concierto de las naciones».

Se trata, pues, de una ley de defensa contra los indeseables y contra los traidores posibles, a quienes el Estado, vale decir, la autoridad, en el orden federal tanto como en el provincial, debe frenar, castigar o alejar, según se trate de argentinos o de extranjeros.

Esta materia que el proyecto ha colocado sobre el tapete público es vieja y elemental —lo acaba de demostrar el señor senador por Santa Fe en su magnífica, erudita y brillante exposición—; es vieja y elemental desde el punto de vista de la legislación penal y de la doctrina, pero es necesario tocarla con claridad, para que el pueblo, a quien únicamente por el Diario de Sesiones del Honorable Senado llega la totalidad del pensamiento y de la palabra de los señores senadores, se ilustre y conozca perfectamente bien de qué se trata en este asunto.

Nadie ignora que los delitos de traición, sabotaje y espionaje están muy bien definidos en nuestro Código Penal del año 1921, y nadie ignora que los títulos de dicho código, que cité al principio, son los que legislan en esta materia en los artículos 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197 del título VII; los artículos 209, 211 y 212 del título VIII; los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 del título IX, y los artículos correspondientes del título X.

El artículo 214 define la traición como un delito contra la seguridad de la Nación, tal como el artículo 1º de este proyecto de ley. El artículo 222 es el claro concepto del espionaje, según se enseña en la Facultad de Derecho, en tanto que otros artículos de los que enumero son de evidente sabotaje o daño, perjuicio material, deterioro, inutilización de máquinas y de edificios, así como también significan sabotaje contra el Estado todos los actos, acciones y omisiones que obstaculicen sistemáticamente el normal desempeño de un gobierno, la discusión y sanción de una ley, el funcionamiento regular de una fábrica del Estado o de los particulares, etcétera.

Las disposiciones proyectadas, lógicamente, vienen a ampliar y completar aquellas otras que están vigentes, porque el desarrollo de la delincuencia en esta materia ha llegado mucho más allá de lo previsto en 1921, fecha de la sanción y vigencia de nuestro moderno Código Penal.

Los que se oponen a estas nuevas normas no deben ignorar que ésta es la verdad, porque, dentro y fuera del Congreso, son letrados conocidos e ilustrados. Para que la opinión pública pueda informarse con toda certeza sobre el significado de las palabras usadas en el código y en el proyecto de ley que vamos a sancionar, he preparado una planilla especial sobre esos

términos, cuya inserción en el Diario de Sesiones (1) solicito desde ahora. Es la parte técnica.

Continuando, diré que los artículos 6º y 8º del proyecto son los que han merecido críticas de los opositores, pero comparando el artículo 6º del proyecto con los artículos vigentes 222 y 223 del Código Penal, puede considerarse que el nuevo artículo no es sino una ampliación necesaria y oportuna del contenido de los otros dos.

El artículo 8º, considerado desde el punto de vista del daño causado a la Nación, como dice el proyecto, cae perfectamente bien en el título IX del Código Penal vigente, título que es el de los delitos contra la seguridad, la paz y la dignidad de la Nación, según lo define el propio Código Penal expresamente, porque éstos son los títulos de los capítulos respectivos.

Esto en cuanto al contenido más importante del proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación.

Al fundar su magnífico proyecto de Código Penal de 1941, el profesor de esa materia, doctor Peco, mi distinguido condiscípulo de otros tiempos, decía que «debíamos resolver argentidamente los problemas de la República». Argentidamente. Y en su extraordinario trabajo de juriconsulto y legislador, que es su proyecto de ley, muy conocido por otra parte, dedica todo el título primero de la sección cuarta a esta materia de los delitos contra los bienes jurídicos del Estado, delitos contra la personalidad del Estado y delitos contra la personalidad internacional del Estado, en forma tan amplia y medular como argentina, confirmando con clarividencia el propósito inicial con que él escribiera su trabajo.

Para el profesor Peco, el espionaje consiste en «procurar documentos, objetos o noticias secretas, y en la revelación u obtención de documentos, objetos o noticias secretas», que deben permanecer secretos en el interés de la seguridad del Estado.

Es el artículo 6º de este proyecto en revisión, que establece todas las posibilidades delictivas sobre esta misma materia, así como el mismo artículo 2º en revisión.

Ahora, el artículo 7º, evidentemente, está inspirado en las legislaciones extranjeras penales, que definen los delitos contra la economía pública, contra la seguridad económica de la Nación y de su ordenamiento jurídico, que es el Estado, porque, desde luego, la economía pública, la seguridad económica de la Nación, hacen de una manera fundamental a la defensa nacional de los tiempos presentes, que el Estado debe asegurar en todos los aspectos.

Sr. Antille. — ¿Me permite, señor senador, con la venia de la Presidencia?

Sr. Madariaga. — Sí, señor senador.

Sr. Antille. — ¿No le parece al señor senador que al calificar el proyecto que el delito debe ser contra el interés de la Nación, ya se limita, determina y califica el delito?

Sr. Madariaga. — Así es.

Sr. Antille. — No es una cosa que sea abstracta o confusa en el proyecto...

Sr. Madariaga. — No señor.

Sr. Antille. — ...como se lo conoce en la opinión de la calle. Eso es bueno destacarlo, porque así los jueces interpretarán el sentido correcto del mismo.

Sr. Madariaga. — Así es, señor senador, completamente de acuerdo.

Sr. Antille. — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Madariaga. — Continúo, señor presidente.

Y esta materia también la trata brillantemente el profesor doctor Peco y le dedica disposiciones terminantes en su proyecto de ley penal.

Por otra parte, el artículo 184 del proyecto Peco, estatuye sobre revelación de secretos científicos e industriales, lo siguiente: «Al que teniendo conocimiento por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de noticias destinadas a permanecer secretas, sobre descubrimiento o invenciones científicas o aplicaciones industriales las divulgare o usare en provecho propio, se le aplicará privación de libertad de seis meses a dos años».

Lo mismo estatuye el artículo 6º de este proyecto.

En cuanto al delito de sabotaje puedo decir que su origen se remonta a los orígenes de las luchas del obrerismo contra el capitalismo, muy conocidas por cierto. Así fué como nació en la táctica de la lucha obrera y está entre los objetivos del método de la lucha obrera: a) la acción directa y b) la acción parlamentaria. Entre las formas más conocidas de otros tiempos, estaban: la huelga, la discusión individual o colectiva de clase, el boicott, el *label*, la marcha lenta, los atentados personales y el sabotaje, o sea la mala elaboración, el desperdicio innecesario de materias primas, la inutilización de las maquinarias, edificios, transportes, etcétera. Y este mismo método se trasplantó después al ordenamiento jurídico de la Nación, es decir, al Estado, como he dejado bien aclarado al definir el delito de sabotaje como el sistemático entorpecimiento de las funciones públicas y la obstrucción legislativa impertinente causando daño a la Nación.

Para terminar de fundar mi voto a favor total del proyecto del Poder Ejecutivo y solidario con las claras expresiones del mensaje presidencial sobre la materia, solamente digo que para los argentinos de nuestro movimiento nacional peronista la seguridad de la Nación y del Estado federal tanto como de los Estados provinciales, según dijera muy bien en las reuniones de la Comisión de Legislación General y

(1) Ver Apéndice de esta sesión, pág. 1542

Asuntos Técnicos el senador por el Estado de Salta doctor Bavio, con esta ley o sin esta ley están absolutamente asegurados y consolidados en la historia nacional, en la Constitución de 1949 y en las leyes que enorgullecen a la República, porque la República tiene una conciencia esclarecida, una voluntad soberana y las fuerzas necesarias para castigar todas las formas de la traición, espionaje, perturbación económica, sabotaje y descreimiento en los destinos infinitos de la argentinidad.

La República Argentina no ha dictado aún, señor presidente, una ley de defensa de la democracia, como la ley sancionada por abrumadora mayoría en el Congreso Federal de Estados Unidos la semana pasada, que el señor presidente de aquel país vetó y que, inmediatamente después, fué confirmada por el mismo Congreso por abrumadora mayoría, anulando totalmente el veto presidencial, de modo tal que aquella ley llamada de fiscalización de los elementos subversivos está en pleno vigor en la gran democracia del Norte.

Por razones similares todos los Estados de la comunidad americana, tarde o temprano, dictarán leyes como aquella de la democracia norteamericana, que se nos suele ofrecer como modelo por los diarios y doctores que critican la sanción de esta ley de represión de malhechores, no de extremistas.

Así como Estados Unidos defiende la democracia, la Nación Argentina resguarda su seguridad y no permitirá traidores ni espías ni saboteadores en su seno, ¡ni ahora ni nunca!

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Como muy bien lo ha expresado el señor miembro informante, en la Cámara de Diputados se debatió ampliamente este proyecto de ley, en un debate que puede considerarse luminoso y que demuestra la alta jerarquía intelectual de nuestro Parlamento. Por eso, señor presidente y porque el señor miembro informante tanto como el señor senador por Corrientes, han expuesto en forma completa el concepto que inspira este proyecto de ley, voy a referirme muy brevemente a algunos puntos esquemáticos solamente.

La oposición en la Cámara de Diputados expresó por intermedio de varios de sus miembros que ellos votarían la ley si supieran o hubieran sabido que se iba a aplicar exclusivamente contra los enemigos de la patria, y como muy bien se les refutó no es posible votar una ley o dejar de votarla, solamente por creencias.

En una democracia se plantea este dilema que ya fué debatido extensamente en la Convención Constituyente de 1949 y en otras oportunidades por este mismo Senado, y es que si, siendo un régimen de libertad la democracia, pueden dictarse normas represivas que coarten el excesivo uso de esa libertad. Y la respuesta ha sido dada terminantemente por los

más ardientes defensores de la democracia y aun por países como Estados Unidos, según la cita muy oportuna del señor senador por Corrientes, en el sentido de que la democracia necesita defenderse para existir y no es posible concebir que por un concepto de debilidad, el mismo régimen que nosotros consideramos bueno y aceptable como nuestro modo de vida, sea destruido por agentes perturbadores.

En «El Federalista», cuando Madison, según creo, estudiaba el problema del Ejecutivo en el proyecto de constitución norteamericana, abogando por un Ejecutivo fuerte, decía que un poder débil era otra forma de decir un gobierno que no era bueno; lo mismo podemos aplicarlo a nuestro sistema democrático: una democracia débil es otra forma de decir una democracia no apta para la defensa de los intereses y de las libertades esenciales que aspiramos a que existan para todos los habitantes de nuestro suelo. Y entre el temor, muy vago por cierto, y muy antojadizo de que esta ley pudiera aplicarse para los mismos argentinos por razones de índole política, y el temor de no sancionarla para defendernos de los agentes que puedan actuar en el país y socavar los cimientos de nuestra propia nacionalidad, creo que no puede haber alternativa de ninguna especie. Me atrevo a decir que daríamos una prueba de verdadera inconciencia si, sabiendo que existen los peligros, no tomáramos las medidas oportunas para defendernos. (*¡Muy bien!*)

Y el caso lo tenemos en la misma Inglaterra, que recién en vísperas, puede decirse, de ser invadida por Alemania, cuando se hablaba ya de la inminente invasión, tomó medidas drásticas para combatir el espionaje.

El objeto de la tutela penal en los casos de espionaje, como dice el eminente penalista italiano Manzini, es la personalidad del Estado. Es indiscutible que el Estado tiene una personalidad, es un ente jurídico, como se dice. Es cierto que algunos juristas de tendencia positivista, como Duguit, han negado la personalidad del Estado; pero las corrientes modernas del pensamiento jurídico reconocen que el Estado es un ente con personalidad, que debe ser defendido. Lo vemos actuar perfectamente con ese carácter de persona, y por lo tanto es necesario dictar todas las normas de carácter jurídico para que esa personalidad subsista en toda su integridad. Y esta defensa del Estado en la cual se integran las personas y las familias, no se hace con el designio, como lo he señalado varias veces, de defender un ente puramente abstracto, sino porque consideramos que dentro del Estado es como realmente el individuo puede desarrollar las facultades en toda su plenitud, si no nos adherimos a las teorías anarquistas, que niegan su existencia.

Quiero señalar ahora un concepto, o un planteamiento que a veces se ha hecho. Nuestra Constitución habla en el artículo 33 de los ene-

migos de la Nación, y de ahí, de ese término, se ha querido deducir que el concepto de traición solamente puede existir en el caso de un estado de guerra. Y en mi concepto, ello constituye un error, por cuanto negaríamos en ese caso el derecho del Estado a defenderse contra la traición en los casos preparatorios de una guerra.

Voy a poner un ejemplo. Es sabido que para preparar la guerra del 70, Bismark inundó de espías el territorio francés. No puede negarse que si esos espías alemanes hubieran actuado en colaboración con espías franceses, como ocurrió en algunos casos, esos franceses que actuaron en tiempo de paz y que prepararon la invasión posterior del ejército alemán, deberían considerarse como traidores, porque me parece que es un caso típico de espionaje a favor de un país enemigo, que si no lo fué en el momento —podríamos decir— de realizar el acto de espionaje, se concretó después en una ayuda efectiva prestada a un país enemigo.

Este concepto de que el espionaje debe ser concebido solamente en tiempo de guerra, ha sido ya también superado por las nuevas doctrinas jurídicas. Así dice Garraud, que en la legislación francesa sólo se habían previsto los actos de espionaje en tiempo de guerra, pero eso hasta 1886, porque después se cambió el concepto, y dice el citado penalista francés que el espionaje puede ser concebido en tiempo de paz o de guerra.

De modo tal que por un principio de lógica y de verdadera defensa de los intereses del país, creo que el concepto de enemigo no puede aplicarse estrictamente al caso de guerra, sino que, como lo establece también la ley que se proyecta, debe aplicarse para el tiempo de paz igualmente.

El mismo tratadista francés dice que el espionaje cometido por un nacional debe ser considerado como una traición. El concepto del espionaje también ha ido extendiéndose porque ya se considera sumamente incompleto el concepto que del espía daba la Cuarta Convención de La Haya, en el sentido de que «sólo puede considerarse como espía al individuo que procede clandestinamente y bajo falsos pretextos, recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un territorio con la intención de comunicarlos al adversario».

El espionaje precisamente se cumple de manera más eficaz en tiempo de paz, pues es en esos casos en los cuales los espías pueden actuar con mayor libertad y es de suponer que no se va a realizar el espionaje, o por lo menos no puede realizarse con la misma magnitud en tiempos de guerra.

Sr. Bavio. — Si me permite, el señor senador y con la venia de la Presidencia, lo interrumpo brevemente para referirme al concepto que acaba de expresar.

Estamos en tiempos de guerra total y es muy problemático hablar ahora de zonas de operaciones...

Sr. Ramella. — Así es.

Sr. Bavio. — ...a que se refirió la Convención de La Haya, porque ahora, con el criterio de la guerra moderna, en primer lugar, estalla muchas veces sin declaración de guerra, y el conflicto, en segundo lugar, abarca todos los ámbitos de la Nación, y, a veces, con características más terribles en la retaguardia que en la misma línea de combate.

Sr. Ramella. — Así es, señor senador.

Quiero referirme aún muy de paso, debido más que nada al falso concepto que ha prevalecido en el sector de la oposición con respecto a la pena de muerte, a este punto, falseado totalmente por ella, considerándolo como lo hicieron ellos, en relación al cristianismo.

En primer lugar, el cristianismo no es una doctrina insubstantial o vaga y que se aplica exclusivamente a los individuos, sino que abarca todos los órdenes de la vida, y por lo tanto abarca el orden social y el orden estatal. Quiero valarme de la alta autoridad de Santo Tomás de Aquino para decir que del punto de vista teórico es perfectamente admisible la pena de muerte. Dice el eminente teólogo que toda parte se ordena al todo, como lo imperfecto a lo perfecto, y por esto toda parte existe naturalmente por causa del todo, y por eso vemos que si es conveniente a la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, cuando está podrido y puede inficionar a los demás miembros, es amputado laudable y saludablemente, y por lo tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida por la conservación del bien común.

Sr. Antille. — ¿Me permite, señor senador?

Hay que destacar que en el proyecto se habla de pena de muerte sólo en el caso de estado de guerra, y no es por lo tanto una medida general, sino excepcional.

Sr. Ramella. — Absolutamente excepcional, señor senador.

La cita que he hecho no implica, desde luego, que pueda discutirse la conveniencia de la pena de muerte, y si realmente produce un efecto intimidatorio como se persigue cuando se establece. Sólo quiero dejar sentado que el concepto verdadero es, para un recto ordenamiento social, de que el ente social pueda defenderse aplicando a los miembros corrompidos la pena de muerte.

Aparte de eso, como muy bien lo ha señalado en su interrupción el señor senador por Santa Fe, en el proyecto se establece la pena de muerte para los casos excepcionales, y no

de manera absoluta, sino también en manera paralela con la reclusión perpetua.

Algunos han dicho que esta ley está defendiéndose de peligros imaginarios y yo creo que no existe esa situación, sino precisamente lo contrario.

Voy a citar, al azar, algunas informaciones de los diarios de los últimos días para demostrar cómo existe actualmente en el mundo una verdadera red de espionaje y de sabotaje tendiente a perturbar la vida de las naciones. Tal, por ejemplo, una noticia del 14 de septiembre proveniente de Londres, en la que se dice «que un vocero del Almirantazgo anunció que se ha encontrado arena en las máquinas principales del portaaviones «Vengeance». Y continúa la información diciendo: «Ya se están investigando las misteriosas averías causadas a otros dos portaaviones, cinco destructores, dos submarinos y varios barcos transportes y buques arsenales.»

Otra comunicación de Londres, del 21 de septiembre, establece que «fué comunicado al Almirantazgo un presunto sabotaje cometido a bordo del submarino británico «Sirdar». Y agrega que «es el décimo cuarto caso de daños sospechosos causados a buques de la armada desde que estalló la guerra de Corea».

Y en las Naciones Unidas, el delegado yugoslavo, señor Kardelj dijo que «se han organizado y provocado incidentes casi todos los días a lo largo de nuestras fronteras. Grupos de saboteadores y espías son enviados a nuestro país».

De modo que creo que no sería prudente en una recta defensa de los intereses del país esperar a que estos males sucedan en él para decidírnos entonces a tomar las medidas oportunas.

Por eso voto este proyecto con la clara conciencia de que lo hago defendiendo, por sobre todas las cosas, los altos intereses de la patria y si algún mal argentino usara la ley para un designio distinto al que ha tenido el legislador, ya no será imputable a éste la falta, sino a ese mal argentino. No por el temor de que las leyes sean mal aplicadas deben dejar de aprobarse; cada uno debe cumplir con su deber y en eso me parece que estriban el buen orden social y la buena defensa del Estado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Herrera. — Pido la palabra.

En adhesión al magnífico informe del señor miembro informante y a las palabras de los señores senadores que me han precedido en el uso de la misma, deseo solamente expresar un concepto, más de carácter técnico militar que de carácter legal.

Pienso, señores senadores, que un proyecto de ley como el que nos ocupa no debe alarmar

a nadie que se sienta realmente argentino o que siendo extranjero habite honesta y lealmente nuestro suelo.

¿Por qué, señor presidente? Porque este proyecto tiende a la represión, en función de la defensa de nuestros más caros intereses, es decir, la defensa de todos nuestros derechos, de nuestra soberanía y de nuestras incalculables riquezas, que son fundamentales para nuestra defensa nacional y para la felicidad de nuestro pueblo.

Y digo que no debe alarmar porque él está destinado exclusivamente a quienes atenten contra el Estado argentino, y no contra los argentinos ni los extranjeros que viven en nuestro suelo.

Tampoco debe alarmar la existencia de un instrumento legal como éste en tiempo de paz, porque es perfectamente sabido que el espionaje es una actividad que se cumple durante largos períodos de paz, si se desea que continúe funcionando con eficacia durante la guerra, porque el espionaje, como otras actividades guerreras, tampoco se improvisa durante la guerra misma.

Diré más: pienso que los verdaderos resultados del espionaje se obtienen más en la paz que durante la guerra.

Lo que sí ocurre es que esos resultados obtenidos en la paz se explotan con vistas y en vísperas de la guerra y más intensamente durante la guerra misma.

Siendo, entonces, una actividad que tiene mayor duración y tan amplia ejecución en la paz como en la guerra, es lógico suponer que el país debe tener el instrumento legal para su represión ya durante la paz.

En concordancia con tal concepto y siendo, a mi entender, la traición y el sabotaje una de las tantas formas de explotación del espionaje, nada más lógico que también sean incluidos en este proyecto, juntamente con aquél.

Para terminar, insisto en que este proyecto no está orientado ni destinado a una determinada persona ni grupo de personas, ni a los argentinos ni a los extranjeros, sino, exclusivamente, contra quienes, en la paz, atenten contra la seguridad y la defensa del Estado argentino. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Teisairé). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Teisairé). — Queda convertido en ley.